

Agricultura donde el mundo mira hacia otro lado

Por Fuad Abu Saif

Activista de base palestino e investigador en la lucha por la tierra y la dignidad, afiliado a la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) y miembro de la coordinación internacional de La Vía Campesina

Introducción

En los campos abiertos del valle del Jordán y a lo largo de las laderas rocosas del sur de Hebrón, los agricultores palestinos luchan por sobrevivir. Aquí, la agricultura es un acto diario de supervivencia bajo un sistema colonial arraigado que despliega la ley, la violencia y el estrangulamiento económico para separar a las personas de sus tierras.

Desde octubre de 2023, Cisjordania ha entrado en una nueva fase de intensificación del despojo. Nada es arbitrario. Las órdenes de demolición se ejecutan con precisión burocrática, la violencia de los colonos se expande con plena protección militar y los recursos vitales, como el agua, los pastos y la movilidad, se cortan bajo el pretexto de la "soberanía". En una declaración reveladora y sin complejos, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, se jactó hace unos días de que 2024 marcó un año récord en demoliciones de casas y estructuras palestinas, celebrándolo como una imposición exitosa del control israelí sobre el Área C. En un entorno tan abiertamente hostil, la noción de desarrollo se vuelve absurda, e incluso la estabilidad básica parece estar fuera de nuestro alcance.

Esta violencia no es incidental, es estructural. Los agricultores palestinos no son vistos como individuos que violan las regulaciones, sino como obstáculos geográficos que deben eliminarse. En lugares como Wadi al-Seeq y Khan al-Ahmar, los beduinos y las comunidades rurales se enfrentan a ataques metódicos: se queman cultivos, se envenenan pozos, se roba ganado y se bloquea la circulación. Forman parte de una estrategia deliberada para crear condiciones inhabitables y forzar el desplazamiento sin una sola orden oficial de expulsión.

En el frente económico, la agricultura está siendo asfixiada. La ocupación israelí controla el 85% de los recursos hídricos de Cisjordania, mientras que a los palestinos se les niega el permiso para perforar o mantener pozos. Según datos del Banco Mundial, la productividad agrícola palestina ha disminuido al menos un 35% en los últimos seis meses. En marcado contraste, los asentamientos agrícolas israelíes cercanos prosperan con acceso sin restricciones al agua, la infraestructura y los mercados internacionales, lo que pone de relieve la marcada desigualdad incrustada en la tierra.

Este artículo busca exponer el brutal sistema de violencia que se esconde detrás de estas violaciones, y amplificar las voces de los agricultores (mujeres y hombres) que continúan cultivando sus tierras en desafío, en memoria y con la firme creencia de que la tierra perdurará más allá del régimen que busca borrarlas.

Ver al agricultor palestino únicamente como un símbolo de resistencia o nostalgia es perder el punto. Hoy en día, el agricultor es el defensor de primera línea de la soberanía, la justicia ambiental y el derecho a la vida misma. La lucha no se trata de una sola cosecha, se trata de salvaguardar la posibilidad misma de una presencia palestina continua en la tierra, más allá de los guetos urbanos y los enclaves fragmentados.

Borrando comunidades a través del robo de tierras y la expulsión

La política de décadas de confiscación de tierras y desplazamientos forzados en Cisjordania llevada a cabo por la ocupación israelí se ha intensificado drásticamente desde el 7 de octubre de 2023, transformándose en una operación a gran escala destinada a redibujar la realidad demográfica de la región. La estrategia que subyace a este proceso ya no se limita a actos aislados de desposesión, sino que se ha convertido en una campaña sistemática de borrado territorial e ingeniería demográfica, dirigida contra los cimientos mismos de la vida agrícola palestina.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Israel se ha apoderado de más de 50.000 dunams de tierras agrícolas palestinas en los meses posteriores a octubre de 2023, lo que supone la mayor ola de confiscaciones en más de dos décadas. Estos acaparamientos de tierras se concentran en regiones agrícolas críticas, como el norte del Valle del Jordán, las colinas del sur de Hebrón y los cinturones rurales que rodean Nablus y Salfit. Estas áreas no son elegidas arbitrariamente, representan el corazón agrícola de Palestina y los últimos espacios que quedan donde las prácticas agrícolas tradicionales persisten a pesar de la expansión de los colonos y el control militar.

Paralelamente, la tasa de desplazamiento forzado ha aumentado. Más de 180 familias de agricultores han sido expulsadas de sus hogares, principalmente en la Zona C, donde Israel conserva plena autoridad civil y militar. Estas expulsiones suelen ir precedidas de una doble embestida, en primer lugar, la emisión de órdenes de demolición o desalojo en virtud de marcos jurídicos opacos, y en segundo lugar, un aluvión de violencia por parte de los colonos, que va desde el incendio provocado de cosechas y el robo de ganado hasta los ataques con munición real y la quema de viviendas. Por lo general, estos actos se llevan a cabo con impunidad y bajo la vigilancia o protección de las fuerzas militares israelíes.

Aldeas como Al-Zubeidat y Ein al-Hilweh, en el valle del Jordán, y Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón, han sido las más afectadas por esta agresión. En estas y otras comunidades rurales, las milicias de colonos respaldadas por la Policía Fronteriza y armadas con armas de uso militar invaden regularmente tierras de cultivo, intimidan a los residentes y destruyen propiedades. El objetivo es claro: hacer que estas zonas sean inhabitables para los palestinos, obligándolos a reubicarse y allanando el camino para una mayor expansión de los colonos. Amnistía Internacional y B'Tselem han documentado decenas de estos ataques coordinados entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

La expansión de los asentamientos es la columna vertebral de esta estrategia. Desde octubre, el gobierno israelí ha avanzado en planes para más de 13.000 nuevas unidades de asentamiento en Cisjordania, un aumento del 40% con respecto a años anteriores. Estos proyectos van acompañados de la construcción de nuevas carreteras de circunvalación exclusivas para los colonos y puestos de control militares, que dividen las tierras palestinas en enclaves inconexos. En muchas zonas, los palestinos deben ahora pasar a través de puertas electrónicas u obtener permisos militares para acceder a sus propias tierras de cultivo. El efecto es un estrangulamiento lento pero deliberado de la vida rural palestina, donde el movimiento, el cultivo y la cohesión comunitaria se ven socavados progresivamente.

Más allá del impacto material, estas acciones erosionan el tejido social de las comunidades agrícolas. Cuando una sola carretera separa a una aldea de su mercado o cuando una incursión de los colonos de una noche resulta en la pérdida de las cosechas de toda una temporada, el golpe no es solo económico sino también psicológico. Los agricultores se ven empujados a una elección imposible: soportar una vida bajo constante amenaza o abandonar la tierra que ha sostenido a sus familias durante generaciones. A medida que se derrumban los medios de vida agrícolas, las familias no tienen otra alternativa que buscar trabajos precarios en los asentamientos israelíes o emigrar a los centros urbanos, lo que afianza aún más la dependencia económica de las mismas fuerzas que las desposeen.

Esta campaña de despojo coincide con uno de los episodios más mortíferos de la historia palestina moderna, el genocidio en curso en Gaza, donde más de 160.000 personas han resultado muertas o heridas. Mientras la atención mundial se centra en la guerra en Gaza, la ocupación israelí está acelerando silenciosamente su proyecto de transformación demográfica en Cisjordania. Según un informe de Blinx de 2025, el año en curso ya ha establecido un récord de demoliciones de viviendas en Cisjordania, un reflejo asombroso del intento de Israel de borrar comunidades palestinas enteras bajo el radar del sistema internacional.

En resumen, la confiscación de tierras y el desplazamiento forzado en la Ribera Occidental son instrumentos de ingeniería étnica. Estas políticas están diseñadas para establecer "hechos sobre el terreno" irreversibles, fragmentar la geografía palestina y destruir la posibilidad de un Estado palestino viable y contiguo. En esencia, representan un ataque a la existencia misma, convirtiendo a cada agricultor palestino en un defensor de primera línea de la identidad, la dignidad y la supervivencia.

Escalada de ataques de colonos

Los últimos meses han sido testigos de una peligrosa transformación de la violencia de los colonos en toda la Ribera Occidental. Ya no se limita a ataques aislados, sino que se ha convertido en una campaña organizada y sostenida de limpieza étnica, dirigida deliberadamente contra los agricultores palestinos y sus comunidades. Los grupos de colonos armados, que operan cada vez con mayor coordinación e impunidad, a menudo bajo la vigilancia o protección de las fuerzas militares israelíes, son ahora fundamentales para una estrategia más amplia destinada a limpiar la Palestina rural de su población autóctona y reforzar el control colonial sobre la tierra. Según Amnistía Internacional (2024), se han documentado más de 410 ataques contra agricultores palestinos en los cuatro meses posteriores al estallido de la guerra genocida en Gaza, lo que representa un aumento del 75% en comparación con el mismo período del año anterior. Estos ataques son metódicos, coordinados y ejecutados con un objetivo claro: cortar la relación entre los palestinos y su tierra.

Las tácticas utilizadas son tanto violentas como simbólicas. En las zonas de Ramallah y Nablus, especialmente en aldeas como Turmus Ayya, Al-Mughayyir y Madama, los colonos han destruido más de 6.200 olivos, muchos de ellos centenarios. El olivo, símbolo del arraigo palestino y de la supervivencia económica, está siendo desarraigado de la identidad cultural y económica del pueblo. Más allá del sabotaje agrícola, los ataques han adquirido un carácter más militarizado. Human Rights Watch (2024) informó de 45 ataques incendiarios contra viviendas, instalaciones de almacenamiento y silos de grano en aldeas cercanas a los asentamientos, llevados a cabo tras redadas coordinadas de colonos bajo la protección del ejército israelí. A menudo se impidió a los bomberos palestinos acceder a las zonas, lo que permitió que los incendios consumieran infraestructuras esenciales y activos ganaderos.

Quizás el desarrollo más alarmante es el aumento de las agresiones físicas directas. B'Tselem (2024) ha documentado 380 incidentes violentos, incluyendo golpizas, fuego real y expulsión forzada de familias mientras trabajaban en sus tierras. Al menos 10 agricultores han muerto y decenas han sufrido lesiones graves, y muchos han quedado discapacitados permanentemente y no pueden volver a las labores agrícolas.

Esta forma de violencia colonial debe ser vista como lo que es: una campaña respaldada por el Estado para dismantelar la economía rural palestina, fracturar la cohesión comunitaria y transformar por la fuerza a los productores agrícolas independientes en una fuerza laboral dependiente de los mercados y salarios israelíes.

Estos incidentes forman parte de una política sistémica más amplia. En tan solo unos meses, los colonos se han apoderado de 270 parcelas agrícolas palestinas, y estas tomas rara vez, si es que alguna vez, son impugnadas por las autoridades israelíes. Por el contrario, más del 85% de las denuncias legales presentadas por palestinos en relación con los

ataques de los colonos han sido desestimadas sin investigación, lo que indica la complicidad oficial en el proceso de limpieza étnica. Una de las características más alarmantes de la actual violencia de los colonos es la coordinación directa y visible entre los colonos armados y las fuerzas de la "Guardia Fronteriza" israelí. En zonas como Masafer Yatta, Qusra y Al-Zubeidat, los colonos suelen llegar en convoyes organizados, muchos de ellos con armas automáticas visibles, mientras que el ejército israelí se mantiene al margen o ayuda activamente restringiendo el movimiento palestino, emitiendo órdenes de evacuación arbitrarias o cerrando las carreteras de acceso. Este paisaje militarizado ha llevado a comunidades agrícolas enteras al borde del abismo. Desde octubre de 2023, más de 180 familias palestinas han sido desplazadas forzosamente debido a una combinación de ataques de colonos y aislamiento impuesto por el ejército. La violencia en curso está asfixiando el sistema agrícola palestino, socavando su viabilidad al generar miedo, sabotear la infraestructura esencial y negar a los agricultores el acceso a sus tierras y agua. Se trata de una estrategia deliberada de borrado gradual y sistémico.

La comunidad internacional, si bien está preocupada por el catastrófico genocidio que se está desarrollando en Gaza, no debe pasar por alto este proceso paralelo en Cisjordania, un proceso que utiliza las herramientas de la expansión colonial, la imposición del apartheid y el terror de los colonos para desarraigar a los palestinos de sus tierras, negarles su derecho a la alimentación y destruir los cimientos de su existencia rural.

La política de agua convertida en un arma y la fragmentación de la agricultura palestina

En Cisjordania, la escasez de agua es un resultado directo de la política israelí destinada a controlar recursos vitales y debilitar la resistencia agrícola palestina. Desde el 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes han intensificado las restricciones al acceso al agua, profundizando un sistema de control hidropolítico de décadas de antigüedad diseñado para erosionar la autosuficiencia palestina y consolidar la expansión colonial de los asentamientos.

Según Amnistía Internacional (2024), la ocupación israelí ejerce control sobre más del 85% de los recursos hídricos de Cisjordania, al tiempo que niega sistemáticamente a los palestinos los permisos para perforar pozos o reparar los sistemas existentes. Desde la escalada de la guerra, las fuerzas israelíes han destruido o sellado más de 240 pozos agrícolas, lo que supone un aumento del 20% con respecto al año anterior (OCHA, 2024). Estos pozos, particularmente concentrados en el valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón, eran esenciales para irrigar las tierras de cultivo. Su pérdida ha contribuido a una caída del 32% en las tierras agrícolas de regadío y al casi colapso de la producción de hortalizas y cítricos en gran parte de Cisjordania (FAO, 2024).

La escasez de agua se ve agravada por el aumento de los costes: el precio del agua transportada ha aumentado un 65% desde finales de 2023, lo que hace que el riego sea inasequible para la mayoría de los pequeños agricultores. En zonas como Salfit, Tubas y Qalqilya, muchas familias han optado por cereales tolerantes a la sequía o han abandonado la agricultura por completo, lo que ha provocado una pérdida generalizada de ingresos y empleos.

Las fuerzas israelíes también han atacado infraestructuras básicas de agua. B'Tselem (2024) relata numerosos casos en los que unidades militares confiscaron tanques de agua utilizados para el riego, especialmente en comunidades agrícolas remotas que carecían de redes de tuberías. Paralelamente, más de 75 manantiales naturales que alguna vez fueron vitales para los pastores palestinos han sido confiscados o convertidos en parques exclusivos para los colonos y sitios recreativos, lo que limita aún más el acceso de la comunidad a las fuentes de agua esenciales.

Las consecuencias económicas son graves. El Banco Mundial (2024) señala que la inflación de los alimentos en Cisjordania ha superado el 41%, como resultado directo de la interrupción de la producción

y la disminución de la oferta local. Esta crisis afecta de manera desproporcionada a los hogares rurales y de bajos ingresos, que ahora se enfrentan a una doble carga: la disminución de los ingresos agrícolas y los precios inasequibles de los alimentos básicos. Al mismo tiempo, el colapso de los sistemas alimentarios locales ha afianzado la dependencia palestina de los mercados israelíes y de la ayuda internacional.

En Gaza, el panorama es aún más catastrófico. El bloqueo y la guerra en curso han paralizado toda la infraestructura hídrica. Más del 70% de los invernaderos y sistemas de riego han sido destruidos, y el 98,1% de los hogares sin acceso al agua afirman haber dejado de cultivar por completo (FSALWG, 2025). El acceso al agua potable se ha vuelto casi imposible, con el aumento de los riesgos de contaminación y la prohibición de entrada a los suministros esenciales de purificación de agua.

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) consagra el derecho a una alimentación adecuada y a no padecer hambre, mientras que la Observación General N° 15 reconoce explícitamente que el acceso al agua es fundamental para la dignidad y la salud humanas. La denegación sistemática de agua a los palestinos, incluida la destrucción de pozos y los regímenes de permisos discriminatorios, constituye una clara violación de estas obligaciones.

Estas dinámicas no son casuales, representan una estrategia deliberada de desestabilización agrícola. Al cortar el agua, restringir la reparación de infraestructuras y favorecer el acceso de los colonos, Israel está implementando un sistema de apartheid estructural del agua que viola el derecho internacional. En el contexto palestino, el agua es un arma política. La política hídrica de la ocupación se ha convertido en un mecanismo central para desarraigar la vida rural palestina, dismantelar los cimientos de la soberanía alimentaria y profundizar la

dependencia económica y territorial. Por lo tanto, la lucha por el agua es inseparable de la lucha más amplia por la tierra, la dignidad y la autodeterminación.

La soberanía alimentaria como práctica desafiante contra el borrado estructural

Hoy en día, los agricultores palestinos cultivan en condiciones que superan con creces los límites de la penuria. Sus campos están rodeados de asentamientos, monitoreados por torres de vigilancia militar y bajo constante amenaza de demolición o incautación. En este contexto, la agricultura ha dejado de ser un medio de vida rutinario, sino que se ha convertido en un acto con carga política. Cada parcela cultivada, cada cosecha extraída de suelos amenazados, es un testimonio de persistencia y de rechazo a la desaparición. Enfrentados al aislamiento, la destrucción y la exclusión, los agricultores insisten en quedarse, plantar, cuidar y renovar su conexión con la tierra como parte de la lucha palestina más amplia por la libertad y la autodeterminación.

Esta resistencia cotidiana se extiende más allá de las restricciones militares para incluir la denegación de acceso, la destrucción de infraestructura, la confiscación de herramientas y la obstrucción de los mercados. Según el Instituto de Estudios de Oriente Medio (IMES, 2024), más del 70% de los agricultores de la Zona C declararon haber enfrentado obstáculos directos o ataques que interrumpieron o dañaron su trabajo durante el año pasado.

En respuesta a la creciente presión y la privación sistémica, muchas comunidades agrícolas palestinas están volviendo a los conocimientos agrícolas tradicionales arraigados en generaciones de experiencia. Un elemento central de esta reactivación es el banco de semillas establecido por la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), que preserva y distribuye variedades de semillas locales resistentes a la sequía. Estas semillas guardadas, intercambiadas y cultivadas fuera del alcance del control corporativo israelí y multinacional se han convertido en símbolos vivientes de soberanía alimentaria y desafío, lo que permite a los agricultores palestinos reclamar el control sobre lo que cultivan y cómo lo cultivan. Al

hacerlo, se resisten a la dependencia impuesta de los sistemas de insumos externos y afirman un futuro agrícola impulsado localmente y basado en la resiliencia, la memoria y la autonomía.

Junto con estos esfuerzos, los agricultores están recuperando la recolección de agua de lluvia, la agricultura de secano, las terrazas de piedra y los métodos agroecológicos de bajo costo. Se trata de respuestas estratégicas y regenerativas a las restricciones israelíes sobre el agua. Según el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, 2024), el 44% de los agricultores palestinos en áreas restringidas o cerradas han adoptado al menos una técnica tradicional en el último año, no solo para sobrevivir sino para seguir cultivando bajo asedio.

La soberanía alimentaria en el contexto palestino no es un eslogan. Es una afirmación vivida y cotidiana que desafía los sistemas de desplazamiento y borrado, reconecta a las comunidades con sus tierras y redefine la supervivencia no a pesar de la ocupación, sino en resistencia a ella.

La agricultura como primera línea en la lucha por la liberación

En Palestina, la agricultura se lleva a cabo bajo asedio, a la sombra de excavadoras y en medio de la amenaza diaria de la explanación. Lo que se está desarrollando en las comunidades rurales es un esfuerzo calculado para separar a la gente de sus tierras, para vaciar el campo de sus habitantes y para quebrar la voluntad colectiva a través de las herramientas coordinadas de la incautación, el incendio provocado, el bloqueo y el hambre.

Sin embargo, la tierra sigue siendo cultivada como un acto de determinación. Quienes siembran hoy no están simplemente persiguiendo una cosecha, sino que se están aferrando a un linaje, afirmando con su trabajo que la tierra no se mide en hectáreas sino en dignidad, memoria y vida misma. Cada estación labrada por manos palestinas escribe una nueva línea en la historia continua de desafío.

Dentro de este panorama, la Unión de Comités de Trabajo Agropecuario (UAWC) está construyendo una realidad diferente. Su trabajo defiende los recursos, reclama tierras, fortalece la soberanía alimentaria y reteje la vida agrícola en un marco de resistencia y supervivencia. Ya sea a través de la preservación de semillas nativas, el apoyo a la producción agroecológica o la creación de cooperativas dirigidas por agricultores, UAWC ayuda a las comunidades a perdurar con estructura, fuerza y propósito.

La agricultura en Palestina es una decisión deliberada y diaria de permanecer arraigado. Todo acto de cultivo bajo ocupación declara que la tierra no será abandonada, incluso cuando sea cercada, bombardeada o confiscada. En esta lucha, la agricultura se convierte en algo más que producción de alimentos, se convierte en política, protección y un camino a seguir.

Los palestinos están plantando su futuro, se mantienen firmes y desafían al mundo a ver cómo es realmente la resistencia arraigada. Y en eso, hay un llamado no solo a la solidaridad, sino al compromiso compartido.